

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Síntesis de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento en relación con la Moción sobre el Informe 2018/19 del antiguo Auditor Principal (Día 3)

Gibraltar, 25 de septiembre de 2025

Introducción

El Ministro Principal prosiguió su intervención hoy explicando por qué el Gobierno considera que el informe del anterior Auditor Principal adolece de defectos de procedimiento, carece de fundamento jurídico y es sustancialmente engañoso en aspectos clave.

Explicó que estos fallos son especialmente evidentes en tres partes del informe: Wildlife (Gibraltar) Limited, la adjudicación de viviendas y Gibraltar Industrial Cleaners Limited.

Wildlife (Gibraltar) Limited

El Gobierno rechazó las críticas relativas a Wildlife (Gibraltar) Limited, que gestiona Alameda Gardens, Commonwealth Park, Campion Park, la Zona Alta del Peñón y el control de gaviotas.

El informe sugería irregularidades debido a la conexión familiar entre el director de la empresa y el Ministro de Medio Ambiente, John Cortés.

La posición del Gobierno está clara:

- **Proceso injusto** – El Auditor emitió un memorándum a última hora del 30 de mayo de 2025, su último día de trabajo, y finalizó el informe al día siguiente, lo cual no dio al Departamento ninguna oportunidad realista de responder. El Gobierno lo considera una falta de imparcialidad que socava la fiabilidad de toda la sección.
- **Continuidad y experiencia** – Wildlife se hizo con el contrato original en 1990-91. Dada la experiencia sin igual de la empresa y sus buenos resultados, el Departamento se basó legalmente en la normativa de contratación que permite la continuidad del servicio en los casos en que una nueva licitación causaría trastornos desproporcionados.
- **Sin beneficio personal** – Al entrar en el Parlamento, el profesor Cortés transfirió sus participaciones. Su esposa conservó una participación minoritaria por motivos simbólicos, pero no desempeñó ningún papel en la empresa ni recibió beneficio financiero alguno. El Gobierno considera que insinuar que hubo corrupción en estas circunstancias es algo infundado y difamatorio.
- **Explicaciones omitidas** – El Departamento ya proporcionó previamente aclaraciones y documentación, que fueron ignoradas en el informe. El Ministro Principal dijo que esta presentación selectiva equivalía a un retrato engañoso.
- **Asesoramiento jurídico independiente** – El asesor legal Jonathan Fisher KC advirtió de que las críticas del Auditor eran jurídicamente erróneas, no tenían en cuenta las

COMUNICADO

exenciones de contratación pertinentes y omitían el contexto fáctico clave. Concluyó que debería retirarse la sección sobre Wildlife.

Por ello, el Gobierno confirmó que propondría al Parlamento rechazar formalmente esta parte del informe.

Adjudicación de viviendas

El Gobierno también rechaza las críticas formuladas en el informe en relación con la adjudicación de viviendas. El Auditor revisó 25 adjudicaciones y denunció irregularidades como la ausencia de políticas documentadas, 18 adjudicaciones realizadas a solicitantes que no figuraban los primeros en la lista de espera, intervenciones directas del Ministro Principal en siete casos, discrepancias entre las actas del comité y las cartas de resolución, y un caso en el que estaba implicada una persona que ya contaba con una vivienda.

El informe concluía que tales intervenciones podrían haber sido ilegales, debido a que no se mencionaban en el Boletín [de Gibraltar] y a la falta de transparencia, y recomendaba la creación de una política formal por escrito.

El Ministro Principal dijo que estas conclusiones tergiversaban tanto el marco jurídico como la práctica ministerial de larga data y recordó al Parlamento lo siguiente:

- **Marco legal** – La Ley de Vivienda de 2007 define a la Autoridad en materia de Vivienda como el Ministro responsable, o cualquier persona designada por el Gobierno. Esto incluye desde hace tiempo al Ministro Principal, que ocupa todas las carteras ministeriales. Los sucesivos Ministros Principales se han ocupado directamente de los casos de vivienda durante décadas.
- **Discrecionalidad ministerial** – El Gobierno subrayó que la discrecionalidad siempre ha formado parte de la adjudicación de viviendas, sobre todo en circunstancias urgentes o excepcionales. Esto está respaldado por la jurisprudencia, incluida la sentencia del caso *Rodríguez contra el Ministro de Vivienda [2009] UKPC 52*, en la que el Consejo Privado confirmó que las autoridades no pueden restringir su discrecionalidad siguiendo rígidamente el orden de la lista de espera.
- **Intervenciones humanitarias legales** – La mayoría de las 18 adjudicaciones que no se correspondieron con el orden de la lista estaban respaldadas por necesidades urgentes documentadas, como violencia doméstica, amenazas a la vida, hacinamiento o protección de menores. En cinco de los siete casos citados, existía documentación justificativa; en los dos restantes, organismos como la Agencia de Servicios Sociales (Care Agency) y la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) habían confirmado las circunstancias. El Gobierno dijo que se trató de decisiones legítimas y compasivas, no de favores políticos.
- **Obligaciones de confidencialidad** – La información sensible no siempre se incluye en los registros públicos para proteger la intimidad de los solicitantes. Según el Gobierno, el informe no reconoce este deber de confidencialidad y, por tanto, extrae conclusiones erróneas sobre la documentación “que falta”.
- **Errores administrativos, no incorrecciones** – Las pequeñas discrepancias entre las actas del comité y las cartas de resolución han sido atribuidas a errores administrativos

COMUNICADO

y han sido corregidas gracias a la formación del personal. Las adjudicaciones [de viviendas] no fueron ilegales.

- **Narrativa selectiva** – El Gobierno quiere subrayar que otras administraciones anteriores también han llevado a cabo intervenciones discrecionales en materia de vivienda. Según el Ministro Principal, el hecho de que el informe no reconozca este precedente histórico ha dado lugar a un informe sesgado y políticamente perjudicial.

El asesoramiento jurídico independiente obtenido por el Gobierno confirma que la interpretación del Auditor del artículo 2 de la Ley de la Vivienda era errónea e ignoraba la práctica constitucional establecida. También advierte de que si se presentan como irregularidades decisiones confidenciales pero legales se corre el riesgo de dañar injustamente la reputación de los funcionarios públicos.

Por estas razones, el Gobierno considera que esta sección del informe también debería eliminarse.

Gibraltar Industrial Cleaners Limited

El Gobierno también ha rebatido enérgicamente las conclusiones del informe relativas a Gibraltar Industrial Cleaners (GIC). Las críticas del Auditor se centraron en las supuestas horas extraordinarias excesivas, las prácticas laborales anticuadas, las ineficiencias y las repercusiones en los costes de los servicios de recogida de basuras. El informe hablaba de una cultura de “acabar y pasar a lo siguiente”, semanas laborales de 74 horas y afirmaba que no se habían aplicado reformas.

El Ministro Principal explicó que estas conclusiones son engañosas, incompletas e injustas por varias razones:

- **Proceso injusto** – La carta del Auditor en la que planteaba sus preocupaciones se entregó solo ocho días antes de que se finalizara el informe, lo que no dio tiempo suficiente a la dirección de GIC y al Departamento de Medio Ambiente para responder. El Gobierno afirma que esto vulneró los principios de igualdad de las partes.
- **Prácticas heredadas** – Las criticadas estructuras salariales y de horas extraordinarias estaban integradas en contratos de más de 20 años de antigüedad y fueron heredadas de administraciones anteriores. No podían ser modificadas unilateralmente sin que se corriera el riesgo de la convocatoria de huelgas, litigios o interrupciones de los servicios de salud pública.
- **Ya hay importantes reformas en marcha** – Antes de que se publicara el informe, el Gobierno había firmado un nuevo convenio colectivo con Unite the Union, en marzo de este año. Este acuerdo suprimió las horas extraordinarias del Director, reestructuró la plantilla, redujo las rutas de recogida, introdujo las recogidas nocturnas y eliminó cinco días festivos como días laborables. También introdujo un nuevo sistema de remuneraciones. Se identificaron ahorros anuales previstos de 685.000 libras. Ninguna de estas reformas aparecía reconocida en el informe del Auditor.
- **Referencias fuera del marco** – A pesar de estar limitado a 2018/19, el informe se refería selectivamente a sucesos y costes hasta 2025, al tiempo que no reconocía las

COMUNICADO

medidas correctoras adoptadas ese mismo año. El Gobierno considera que esta omisión distorsionaba el panorama y rebasaba las competencias del Auditor.

El Ministro Principal señaló que las normas de auditoría reconocidas internacionalmente, incluido el código de buenas prácticas de auditoría de la inglesa Oficina Nacional de Auditoría (National Audit Office, NAO), exigen que los informes sean justos, equilibrados y basados en pruebas. Al presentar prácticas anticuadas como si fueran actuales y omitir la referencia al convenio colectivo, el Auditor no cumplió estas normas.

El asesoramiento jurídico independiente de Fisher respaldó esta opinión. Concluyó que la omisión de las medidas correctoras hacía que el informe fuera incompleto y engañoso, que el uso selectivo de información posterior a 2019 sin referencia a las reformas excedía el mandato legal del Auditor, y que el hecho de no presentar una cuenta equilibrada ponía en riesgo la reputación de los organismos públicos y era profesionalmente deficiente. Sobre esta base, Fisher aconsejó la retirada de la sección GIC del informe.

Conclusión

Sobre la base de todo lo anterior, el Ministro Principal confirmó que la moción presentada ante la Cámara se modificaría para incluir todas las consideraciones mencionadas.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Álvaro López, alvaro@infogibraltar.com, Tel 662 386 833

Nacho Arranz, nacho@infogibraltar.com, Tel 674 283 002

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 691/2025

Date: 25th September 2025

Summary Document: The Chief Minister's address to Parliament on the Motion on the former Principal Auditor's 2018/19 Report, Day 3

Introduction

The Chief Minister continued his address today by further explaining why the Government considered the former Principal Auditor's report to be procedurally flawed, legally unsound, and substantively misleading in key areas.

He explained that these failings were particularly evident in three areas of the report, those dealing with: Wildlife (Gibraltar) Limited, Housing Allocations, and Gibraltar Industrial Cleaners Limited.

Wildlife (Gibraltar) Limited

The Government rejected the criticisms concerning Wildlife (Gibraltar) Limited, which manages Alameda Gardens, Commonwealth Park, Campion Park, the Upper Rock, and gull control.

The report suggested impropriety due to the family connection between the company's director and the Minister for the Environment, Professor John Cortes.

The Government's position was clear:

- **Unfair process** – The Auditor issued a memorandum late on 30 May 2025, his final working day, and finalised the report the next day. This gave the Department no realistic chance to respond. The Government described this as a breach of fairness that undermined the reliability of the entire section.
- **Continuity and expertise** – Wildlife had been awarded the original contract in 1990–91. Due to the company's unique expertise and strong performance, the Department lawfully relied on procurement regulations that permit continuity of service where re-tendering would cause disproportionate disruption.
- **No personal gain** – On entering Parliament, Professor Cortes transferred his shares. His wife retained a minority holding for symbolic reasons but had no role in the company and received no financial benefit. The Government said to imply corruption in these circumstances was unfounded and defamatory.
- **Omitted explanations** – The Department had previously provided clarifications and documentation, which were ignored in the report. The Chief Minister said this selective presentation amounted to a misleading portrayal.



- **Independent legal advice** – Mr Fisher KC advised that the Auditor’s criticisms were legally flawed, failed to consider relevant procurement exemptions, and omitted key factual context. He concluded that the Wildlife section should be withdrawn.

The Government therefore confirmed it would propose that Parliament formally reject this part of the report.

Housing Allocations

The Government also rejected the criticisms made in the report regarding housing allocations. The Auditor reviewed 25 allocations and alleged irregularities, including: absence of documented policies, 18 allocations made to applicants not first on the waiting list, direct interventions by the Chief Minister in seven cases, discrepancies between committee minutes and outcome letters, and one case involving a previous homeowner.

The report concluded that such interventions may have been unlawful, citing the absence of Gazette designation and a lack of transparency, and recommended the creation of a formal written policy.

The Chief Minister said these conclusions misrepresented both the legal framework and long-standing ministerial practice. He reminded Parliament that:

- **Statutory framework** – The Housing Act 2007 defines the Housing Authority as the Minister responsible, or any person designated by Government. This has long included the Chief Minister, who holds all ministerial portfolios. Successive Chief Ministers have dealt directly with housing cases for decades.
- **Ministerial discretion** – The Government stressed that discretion has always formed part of housing allocations, particularly in urgent or exceptional circumstances. This is supported by case law, including *Rodriguez v Minister of Housing* [2009] UKPC 52, where the Privy Council confirmed that authorities cannot fetter discretion by rigidly following waiting-list order.
- **Lawful humanitarian interventions** – Of the 18 allocations outside list order, the majority were supported by documented urgent needs such as domestic violence, threats to life, overcrowding, or child safeguarding. In five of the seven cases cited, supporting documentation existed; in the remaining two, the circumstances were confirmed by agencies such as the Care Agency and Royal Gibraltar Police. The Government said these were lawful, compassionate decisions, not political favours.
- **Confidentiality obligations** – Sensitive information was not always included in public records to protect applicants’ privacy. The report, the Government said, failed to acknowledge this duty of confidentiality and therefore drew misleading conclusions about “missing” documentation.
- **Clerical errors, not impropriety** – Minor discrepancies between committee minutes and outcome letters were attributed to clerical mistakes and have since been corrected through staff training. These did not amount to unlawful allocations.
- **Selective narrative** – The Government highlighted that discretionary interventions in housing have also been used under previous administrations. The failure of the report to



recognise this historical precedent, the Chief Minister said, resulted in a skewed and politically prejudicial account.

Independent legal advice obtained by the Government confirmed that the Auditor's interpretation of section 2 of the Housing Act was flawed and ignored established constitutional practice. It also warned that portraying confidential but lawful decisions as irregularities risked unfairly damaging the reputations of public officials.

For these reasons, the Government stated that this section of the report should also be withdrawn.

Gibraltar Industrial Cleaners Limited

The Government also strongly contested the findings in the report relating to Gibraltar Industrial Cleaners (GIC). The Auditor's criticisms centred on alleged excessive overtime, outdated working practices, inefficiencies, and cost implications in refuse collection services. The report described a "finish and go" culture, 74-hour working weeks, and claimed that reforms had not been implemented.

The Chief Minister explained that these findings were misleading, incomplete, and unfair for several reasons:

- **Unfair process** – The Auditor's letter raising concerns was delivered only eight days before the report was finalised, giving GIC management and the Department of the Environment insufficient time to respond. The Government said this breached principles of procedural fairness.
- **Inherited practices** – The criticised pay and overtime structures were embedded in contracts stretching back more than 20 years and inherited from previous administrations. They could not be unilaterally changed without risking industrial action, legal disputes, or disruption to public health services.
- **Major reforms already in place** – Before the report was published, the Government had signed a new collective agreement with Unite the Union in March 2025. This agreement abolished the Manager's overtime, restructured staffing, reduced collection routes, introduced evening collections, and eliminated five public holidays as working days. It also introduced a new allowance system. Projected annual savings of £685,000 were identified. None of these reforms were acknowledged in the Auditor's report.
- **Out-of-scope references** – Despite being limited to 2018/19, the report selectively referred to events and costs from as late as 2025, while failing to acknowledge the corrective actions taken in that same year. The Government said this omission distorted the picture and strayed beyond the Auditor's remit.

The Chief Minister noted that internationally recognised audit standards, including the NAO Code of Audit Practice, require reports to be fair, balanced, and evidence-based. By presenting outdated practices as if they were current, and omitting reference to the collective agreement, the Auditor had failed to meet these standards.



Independent legal advice from Mr Fisher KC supported this view. He concluded that the omission of corrective actions rendered the report incomplete and misleading, that the selective use of post-2019 information without reference to reforms exceeded the Auditor's statutory remit, and that the failure to present a balanced account risked reputational harm to public bodies and was professionally deficient. On that basis, Mr Fisher KC advised that the GIC section of the report should be withdrawn.

Conclusion

On the basis of all of the above, The Chief Minister confirmed that the motion before the House would be amended to include all aforementioned considerations.